

Análisis crítico de la jurisdicción electoral mexicana en materia de creación de políticas públicas

Por Claudio Roberto Vázquez Alfaro

Desde el pensamiento clásico de la teoría política, la labor de los jueces está centrada en la resolución de disputas mediante la interpretación y la aplicación del derecho, con los subsecuentes cambios en la dimensión del desempeño jurisdiccional para servir como garante de la constitucionalidad de actos y leyes del Estado, conformándose como el intérprete constitucional que en ocasiones, realiza funciones de legislador negativo al disponer la expulsión de normas jurídicas que no cumplen el parámetro de control constitucional.

No obstante, más allá de las objeciones contramayoritarias hacia la actividad judicial, en nuestros días los integrantes de la jurisdicción electoral han asumido un papel que excede la invalidación de las normas, pues con base en diversas sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados electorales han diseñado y ordenado a otras instancias del Estado mexicano, implementar políticas públicas en materia de participación y ejercicio de derechos, que exceden la idea de un legislador negativo y lo convierten en creador de normas e instituciones dentro del Estado Mexicano. Así ha ocurrido en materia del voto de las personas en situación de prisión preventiva, en la creación de un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y en la creación por parte del Instituto Nacional Electoral de lineamientos que permitan verificar de manera certera el cumplimiento de la autoadscripción indígena calificada en la postulación de candidaturas a cargos federales.

Es por ello que en la investigación se realizará un análisis crítico de estas decisiones jurisdiccionales bajo el planteamiento de las siguientes preguntas: ¿cuáles son las razones que justifican la actuación del juez constitucional para convertirse en creador de políticas públicas?, ¿se justifica dicha actividad en el marco de las democracias participativas para hacer a un lado a los órganos representativos y asumir el rol de diseñadores institucionales?